

13. La matriz mafiosa en la historia económica argentina

13.1 El marco del análisis

A veces los acontecimientos sorprenden por su magnitud y creemos que se trata de hechos inéditos. Es el caso de la actual crisis argentina, donde muchos comportamientos parecen desarrollados al amparo del impreciso concepto de globalización, tomado como una fatalidad inevitable; pero existen actitudes sociales que responden a matrices más añejas. Señala Fernand Braudel la existencia de diferentes niveles de historia: la historia de los acontecimientos, aquello que Cortazar calificó como “fast-food” de las noticias, que inunda nuestras pantallas, radios y diarios de modo cotidiano, al punto que las noticias de un mes atrás parecen viejas de un siglo; la historia de mediano plazo, que se refleja en los ciclos de la economía, que se mide en lustros o decenios; la historia de largo plazo, que estudia los fondos culturales de la sociedad, aquello que cambia con mucha lentitud, donde encontramos las maneras de vivir, de percibir, de actuar de los diferentes grupos sociales.

Es en ese contexto que creemos que para develar en su totalidad la matriz de la sociedad mafiosa local es necesario considerar su origen y desarrollo en los diferentes tiempos de la Argentina. No es nuestro objetivo hacer aquí una historia económica¹, sino analizar cómo cada grupo social dominante adapta las costumbres y usos de la época, como un disfraz de modernidad que esconde muchas veces patrones de comportamientos que responden a lógicas históricas. Estos “habitus”² sociales se originan en un lugar y en un momento históricos, pero muchas veces ingresan en el “tiempo largo” y constituyen verdaderos modelos de comportamiento mientras pasan los años. De allí que consideremos necesario pensar en los momentos de nuestro pasado donde se gestó esta matriz mafiosa; en particular en la etapa colonial y el momento de la independencia; luego, su impacto en la Argentina de 1880 al decenio de 1930, en particular a través de concesiones y contratos; su realidad actual, que por un inédito abuso de lenguaje se llama “Patria Financiera”.

Esta es una breve reflexión económica, guiada por una motivación política. Más que imaginar la sociedad óptima, figura clásica del discurso político tradicional que apela a la imaginación y que sirve de coartada para mantener un estado de cosas, preferimos estudiar lo pésimo de nuestra situación, porque es objeto de análisis y de inteligencia. Llama a la voluntad. Para reducir el impacto de esa matriz mafiosa hoy, para arrancarla de cuajo de la vida argentina mañana, es preciso conocerla, en sus orígenes, que dictan sus percepciones, en sus motivaciones, que modelan su conducta.

13.2 Minerales, mercaderes y contrabandistas: el nacimiento de nuestra clase dirigente

Por ser una época poco conocida, no es menos reveladora. En la conformación de la economía colonial encontramos una estructura social y un sistema político que interactuaron para crear determinados modos de producir, acumular y distribuir bienes y poder, mucho de los cuales han sobrevivido y forman parte del “habitus” de determinados grupos dominantes argentinos.

Las características fundamentales de la economía del período colonial son sabidas. Motivada por la explotación minera, la metrópoli estableció una firme dominación política e instaló monopolios que le permitan extraer minerales preciosos del Alto Perú y llevarlos a España. El comercio de metal “supera el 77% de todas las exportaciones”³. En ese momento la columna vertebral de la Argentina colonial es el trayecto del Alto Perú a Buenos Aires, donde se genera la poca actividad necesaria a la extracción minera: bienes y servicios (vivienda, transporte y alimentos), artículos escasos o de gran valor⁴, en función de la demanda europea. En ese contexto, Buenos Aires es el puerto de salida de las riquezas; toda la sociedad colonial gira en función de la metrópoli.

¹ Existe una amplia bibliografía al respecto. Desde el clásico de Juan Álvarez sobre las Guerras Civiles Argentinas hasta las obras más recientes de Mario Rapoport y Guillermo Vitelli, sin contar los escritos de Raúl Prebisch y Aldo Ferrer, entre otros.

² Véase Pierre Bourdieu, *La distinción, critique sociale du jugement*, Ed. de Minuit, Paris, 1979.

³ Ricardo E. Rodríguez Molas, *Historia social del gaucho*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1982 (primera edición en 1968).

⁴ Véase Roberto Condes Conde y Ezequiel Gallo, *La Formación de la Argentina Moderna*, Paidós, Buenos Aires, 1967, pág 12.

El desarrollo interno de estas colonias queda como consecuencia y reaseguro del sistema económico: poco o nada de educación, instituciones religiosas para repetir los dogmas que vienen de España. La inquisición local veda la interpretación del pensamiento de Santo Tomás de Aquino en el sentido que “la legitima potestad que viene de Dios la da o comunica el pueblo”⁵. Sólo hay desprecio hacia los indígenas, los mestizos, los criollos. Se establece un sistema de representaciones en torno al origen étnico correspondiente a una clase social, burlado muy de vez en cuando por criollos enriquecidos por el contrabando.

Porque la necesidad de manufacturas más o menos elaboradas, cuando no de mano de obra a través de la trata de negros, impusieron que la cerrada economía colonial abriese la puerta trasera del comercio internacional: el contrabando. Los primeros en violar las estrictas normas coloniales fueron los propios funcionarios, que pedían a cambio “*a very considerable present*” al decir de los comerciantes ingleses⁶, e inauguran así el comportamiento de “acato, pero no cumplo” frente a la legislación vigente, destinado a una fama intemporal⁷.

Explotación minera y contrabando no son fenómenos aislados, sino que se solapan y hasta complementan. Los ingleses desembarcan esclavos y trasladan “barras de plata y pieles de cuero”⁸; los comerciantes de esclavos aprovechan para contrabandear manufacturas de origen europeo; las prohibiciones legales sirven para levantar el precio de las coimas de los funcionarios reales. Así es como navegantes ingleses, mercaderes y latifundistas locales comienzan un funcionamiento de mutuo provecho.

La acumulación económica depende de la intermediación, ya sea de bienes y servicios para la explotación minera del Alto Perú, ya sea como proveedores de carne para los esclavos y cuero, ambas de exportación. No son clases ajenas: los beneficios de la trata y del contrabando sirven para comprar campos, que se valorizan por la demanda de cueros. Pero este estilo económico encierra, como todos los modelos, varios axiomas sociales necesarios para su sustentabilidad. En primer lugar, mantener y acrecentar la propiedad latifundaria. Las familias que se hubiesen instalado en el campo para criar ganado o arar la tierra son acusadas de “dañinas” y expulsadas. En segundo lugar, no hay espacio para las personas que no dependen de modo directo de este esquema económico: pasan a ser los “vagos y mal entretenidos”, a la orilla de la ley, objeto de represión.

Nace la primer clase dirigente local. Sus ejes son la producción de minerales y cueros, la acumulación a través de la intermediación legal o ilegal, la distribución limitada a los selectos círculos locales. El deseo de rápido ascenso social marca la necesidad de sacar para afuera sin reinvertir en el lugar, profundizar la propiedad desigualitaria y criminalizar cualquier sector social ajeno. De esta matriz económica de antiguo régimen agravado por la colonia nace la mentalidad tradicional, que aún estructura muchas conductas actuales.

¿Fatalidad en el nacimiento mismo de nuestra Nación, que ha de determinarnos por siempre? ¿Excusa histórica para la cleptocracia actual? Más bien resultado de opciones políticas, tanto locales como internacionales. Así es apreciable la diferencia entre la colonización en lo que serían Argentina y Estados Unidos. En el primer caso, colonias de explotación de riquezas naturales, sin ningún interés en acumular localmente y desarrollar el país que ocupan; colonias de poblamiento, que debieron auto sustentarse muy rápido, en el segundo caso. Diferencia de propiedad de la tierra, en donde el monopolio de la Corona española impedía el arraigo efectivo y el desarrollo de una clase de pequeños propietarios, aspectos que se dieron en el norte, donde el colono era dueño de su parcela⁹.

Así llegamos al momento de la Independencia, donde confluyen intereses varios. El del comercio inglés, que intentó sin éxito apoderarse de estas tierras y nos dio la primer epopeya nacional, pre-republicana; el de los mercaderes y latifundistas, que veían con buenos ojos sacarse la dominación española pero conservando el orden social; el de los patriotas que pretendían construir una sociedad.

⁵ Véase Arturo Enrique Sampay, *Las Constituciones de la Argentina*, Eudeba, Buenos Aires, 1975, pág. 7.

⁶ Ricardo E. Rodríguez Molas, *op. cit.* pág.54 y ss.

⁷ Nicolás Shumway, *La argentina, historia de la una idea*, Editorial Emecé, Buenos Aires

⁸ Ricardo E. Rodríguez Molas, *op. cit.*, pág.54 y ss

⁹ Véase Guillermo Vitelli, *Los dos siglos de la Argentina*, Editorial Prendergast, Buenos Aires, pág 70.

Esa sociedad futura era la de la máquina que suplía el trabajo del hombre, en el pensamiento de Belgrano, que planteaba la necesidad de “escuelas gratuitas donde pudiesen los infelices mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna”¹⁰ como requisito para dominar la tecnología; cuando Saavedra negaba la doctrina del derecho divino de los gobernantes; donde Moreno planteaba aprovechar los acontecimientos mundiales para que los pueblos “expliquen su voluntad general”¹¹ por medio de una Constitución.

Para concluir sobre este período, acaso convenga rescatar aquí dos testimonios de la dinámica nacional que lanzó la Revolución de Mayo. Escribía Moreno que “los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos; y no deben fiar sino de sí mismo. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en hora buena, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria, y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas; pero miremos sus consejos con la mayor reserva, y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas, en medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y abalorios”¹². En cuanto a la propiedad, ligada por naturaleza a la cuestión social, Artigas manda repartir las tierras expropiadas a los “malos europeos y peores americanos”, cuidando que “los más infelices sean los más privilegiados”, para que los “sambos (...) indios y criollos pobres” tengan una tierra que cultivar.¹³

Terrible disyuntiva, la de fundar una Nación en lucha externa contra la potencia colonial, y en lucha interna, donde subyacía la elección entre la complementariedad de las incipientes manufacturas del interior con la producción agropecuaria del litoral, por una parte, o la incorporación del litoral al comercio mundial a través de la ganadería expansiva. Esta última solución planteaba mantener y aumentar el latifundio, así como liquidar las incipientes manufacturas locales, con el consiguiente deterioro del nivel de vida, por obra y gracia de la importación de productos europeos. De esa lucha económica también dependía la conformación política del nuevo país, así como su ordenamiento social. Al final, triunfaron las mentalidades más tradicionales, para que los mercaderes y contrabandistas pudieran devenir prósperos terratenientes: un orden colonial sin España. Sin embargo, por vez primera se elevó frente a esa matriz delictiva el movimiento de la Revolución de Mayo, que con el 9 de Julio y las guerras de Independencia marcaron el nacimiento de otra visión de la Argentina. También es una matriz que perdura.

13.3 Tierra, trigo, vacas y ferrocarriles: la Argentina agraria

La generación de 1880 construyó un país nuevo, que poco tenía que ver con el anterior. En ese período de luces y sombras, el esquema de crecimiento consistió en la incorporación de Argentina al mercado mundial, con una articulación externa privilegiada con Gran Bretaña. Este modelo exigía una serie de condiciones: red ferroviaria, silos y puertos; inmigración masiva; instrucción generalizada. El cambio fue asombroso. Entre 1900 y 1940 la población se triplicó, el capital instalado se multiplicó por 3,8; el producto interno bruto por 4,3; la inversión por 2,7; el consumo por 4,2; las importaciones por 2,1. Expansión inusitada que generó esperanzas a la altura de los versos de Rubén Darío: “¡Hay en la tierra una Argentina!/He aquí la región del Dorado,/he aquí el paraíso terrestre,/he aquí la ventura esperada” (*Canto a la Argentina*, 1910).

Al mismo tiempo cambió la configuración del poder. El “gobernar es poblar” de Alberdi y el “hay que educar al soberano” de Sarmiento constituyeron la agenda política. La política estaba en manos de la oligarquía terrateniente aliada a Gran Bretaña, que garantizó por boca del Presidente General Julio A. Roca (1880-1886 y 1898-1904) cincuenta años de paz y administración. Sorprendente profecía: en 1930 comenzó a agrietarse esa Argentina agraria, que perdió la hegemonía política y económica en el decenio de 1940.

El revés de la medalla es evocado rara vez. Sin embargo, la Argentina del Centenario sufría de graves desequilibrios sociales, políticos, económicos. En lo social, el *Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo* de Juan Bialet

¹⁰ Véase Manuel Belgrano, *Correo de Comercio de Buenos-Ayres*, n° 30 del sábado 22 de Septiembre de 1810.

¹¹ Véase Arturo Enrique Sampay, *op. cit.*, pág. 8.

¹² Véase Mariano Moreno, *Gazeta de Buenos-Ayres*, jueves 20 de septiembre de 1810.

¹³ Arturo Enrique Sampay, *op. cit.*, pág. 18.

Massé describe las desigualdades sociales y regionales con crudo realismo. En el plano político, hasta 1912 se practicó una democracia violenta y fraudulenta. La matriz delictiva heredada de la colonia se transformó, en particular a través de la incorporación de las élites del interior a la política de acumulación centralizada en la ciudad-puerto¹⁴, la desaparición del gaucho como grupo social y la recodificación de la cultura nacional a través de la educación masiva, tanto para la población criolla como para el aporte inmigratorio.

Esta matriz tuvo su expresión en la conquista del desierto (fusiles remington y telégrafo) y el reparto de las tierras conquistadas (en 1879). Además de la represión hacia la población indígena, fueron millones de hectáreas repartidas con arbitrariedad en forma de latifundios. Para el resto, sólo existía tenencia precaria. Después de la conquista del desierto, 67 propietarios eran dueños de 6.062.000 de hectáreas.¹⁵ Estuvimos muy lejos de la estructura granjera o de predios medianos de Estados Unidos. No obstante, la expansión agrícola fue impresionante: de 580.000 hectáreas sembradas en 1872, se pasó a 6.000.000 en 1900 y a 22.000.000 en 1914.¹⁶ Después del reparto de las tierras, su enorme valorización generó una especulación desenfadada, que llevó a la crisis de 1890.

En el período que va desde 1880 hasta 1930, la producción agraria fue el motor del desarrollo. Entre los productores, un grupo de terratenientes acaparó las mejores tierras, a la que accedió casi gratuitamente y que con escasas inversiones le aseguraban una elevada renta; es el momento de la incorporación como "habitus" económico de producir a costos nacionales y vender a precios internacionales. A la intermediación de los tiempos de la colonia se superpone la naturaleza rentística de la oligarquía que gobernó el país, que repite la pauta de acumular afuera y distribuir consumo suntuario en pequeña escala. Los otros grandes beneficiarios fueron los exportadores. Sólo el 25% de esa producción era absorbida por el mercado interno: al resto lo exportaban pocas empresas multinacionales europeas; cinco de ellas vendían el 70% de los embarques de trigo, 73% de los de maíz y 90% de los de lino.¹⁷

En otros casos de economías regionales, la situación fue peor. En el norte de Santa Fe, el comportamiento rentístico y depredador de una empresa inglesa agotó el quebracho.

Ligada a la disponibilidad de tierras estuvo la construcción de ferrocarriles, necesaria para la exportación agrícola. El Estado les garantizaba a las empresas un piso de beneficios, extensiones de tierra a ambos costados de las vías, exenciones arancelarias y fiscales. Fue un excelente negocio, en el cual se obtenían enormes ganancias, que se disimulaban para pagar menos impuestos. En particular, mediante la compra de materiales ferroviarios a precios muy elevados a subsidiarias inglesas de las empresas, práctica incorporada desde entonces a la matriz mafiosa, en muchas otras actividades distintas del transporte.

Por su parte, el negocio financiero siempre estuvo presente. Ya el endeudamiento externo ruinoso había comenzado con el préstamo de la Baring Brothers de 1824, que fue pagado varias veces. Los empréstitos se intensificaron después de 1875 y lo que quedaba después del pago de intereses, comisiones y desvíos, se destinó a gastos militares (guerra del Paraguay), obras de infraestructura y ferrocarriles. Se proponían sobre todo ampliar el área de influencia británica y vender servicios. Después vino el auge: en 1874 el total de inversiones británicas era de 23 millones de libras y en 1890 de 175 millones. En ese momento, los capitales buscaban rentabilidad, que era mucho mayor que en el país de origen. Señala Nicolás Shumway que "Avellaneda también continuó la lamentable práctica, iniciada por Mitre, de atender a la deuda existente con nuevos créditos, política que funciona razonablemente bien durante períodos de crecimiento rápido, pero que lleva al desastre durante las contracciones económicas"¹⁸. El servicio de la deuda constituyó una pesada carga, aliviada por el boom de exportaciones que sobrevino a partir de 1891. Se ha estimado que entre 1880 y 1914, el servicio de la deuda insumió entre el 30 y el 40% de las exportaciones.¹⁹ El stock de capital extranjero que era insignificante en 1860,

¹⁴ Véase Natalio Botana, *El orden conservador*, Planeta, Buenos Aires

¹⁵ Véase Roman Gaignard, *La pampa argentina*, Buenos Aires, 1989, citado por Mario Rapoport, *Historia económica, política y social de la Argentina*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2000, pág. 27.

¹⁶ Véase Mario Rapoport, *op. cit.*, pág. 58.

¹⁷ Véase Mario Rapoport, *op. cit.*, pág. 172.

¹⁸ Véase Nicolás Shumway, *Historia de una idea, la invención de la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 1993, pág. 303.

¹⁹ Véase Mario Rapoport, *op. cit.*, pág. 36, sobre la base de John H. Williams, *Argentina international trade under inconvertible paper money, 1880-1900*, Harvard, 1920.

llegó en 1900 al equivalente de 3.000 millones de dólares actuales y en 1913 a alrededor de 13.000 millones.²⁰ En cuanto a los flujos financieros, entre 1900 y 1940 la entrada de capitales de largo plazo fue de 2.247 millones de dólares (a precios de 1950) y las remesas de intereses y utilidades de 3.467 millones.²¹

Lejos de ser el paraíso del “laissez faire”, el Estado tuvo una presencia activa: la distribución del ingreso entre actividades agrarias e industriales dependía de la política económica general, que fijaba el gobierno, a través del tipo de cambio, la tasa de interés, las tarifas de servicios públicos. El Estado también captó parte importante de los ingresos, sobre todo a través de los impuestos a la importación. Alrededor del Estado se constituyeron mafias de especuladores e intermediarios que aprovecharon concesiones y negocios de toda índole.²²

Aquí aparecen los límites de la Argentina agraria. La instrucción masiva, necesaria para el nuevo modelo, así como la progresiva democratización que llegaría con la ley Saénz Peña, como premisa para alcanzar mayor sustentabilidad política, amenazaban las bases de dominación oligárquica ancladas en la mentalidad tradicional. La creación de YPF en 1922 durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen marca un peligroso antecedente: el Estado puede ser instrumento de recuperación nacional. De allí la necesidad para la matriz delictiva local de asegurarse el control del poder público cuando una crisis, la ruptura del contacto con la metrópoli económica o la profundización de procesos democráticos participativos pudiesen amenazar sus pautas de acumulación, distribución y consumo. Represión interna puntual, y luego a gran escala: golpe de Estado de 1930 y posterior fraude electoral, llamado “fraude patriótico”.

La industria de la carne, fundamental en el desarrollo de la época, es un ejemplo de los manejos de la matriz mafiosa. En el caso de la pugna entre criadores, invernadores, frigoríficos y navieros, se produjo en el Senado de la Nación en 1935 el conocido debate de las carnes protagonizado por Lisandro de la Torre, en cuyo transcurso fue asesinado el senador Enzo Bordabehere. Se probaron allí fraudes de los frigoríficos, abusos en contra de los ganaderos, evasiones fiscales y prácticas monopólicas.

Otros políticos, como Alfredo Palacios que denunció la condición miserable del interior argentino, o pensadores como Manuel Ugarte y Raúl Scalabrini Ortiz se asomaron a la realidad política y económica. Escribe este último: “computé los elementos primordiales de la colectividad y verifiqué con asombro inenarrable que todos los órdenes de la economía argentina obedecían a directivas extranjeras (...) Ferrocarriles, tranvías, teléfonos y por lo menos el cincuenta por ciento del capital de los establecimientos industriales y comerciales es propiedad de extranjeros, en su mayor parte ingleses (...) Esto explica por qué en un pueblo exportador de materias alimenticias puede haber hambre; ha comenzado a haber hambre. Es que ya al nacer el trigo y el ternero no son de quien lo sembró o los crió, sino del acreedor hipotecario, del prestamista que adelantó los fondos, del banquero que dio un préstamo al Estado, del ferrocarril, del frigorífico, de las empresas navieras... de todos menos de él”²³

La irrupción del Peronismo, significó la apertura de un ciclo histórico, caracterizado por la redistribución del ingreso, la incorporación de conquistas sociales, y un fuerte acento en la industrialización de la economía. En esa suerte de pausa entre el proceso histórico anterior y el que sobrevino a posteriori del golpe militar de 1976, debemos señalar la dimensión de la figura de Eva Peron como abanderada de las conquistas sociales

13.4 El modelo troglodita: de las “cuevas” al poder

El último golpe militar impuso un modelo económico que se instaló en el período 1976-1983 y conoció su mayor desarrollo desde 1991 hasta ahora. Los ejes de este modelo son determinadas “reformas estructurales”, tales como el achicamiento del Estado, la

²⁰ Véase Aldo Ferrer, *La economía argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires/México, 2000, pág. 116.

²¹ CEPAL, *Análisis y proyecciones del desarrollo económico. El desarrollo económico de la Argentina*, México, 1959, Anexo II.

²² Para una descripción de este período, véase Luis A. Romero, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1994, en especial el capítulo 1.

²³ Norberto Galasso, *Raúl Scalabrini Ortiz y la penetración inglesa*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984, pág. 22.

redistribución regresiva del ingreso y pérdida de derechos laborales, la liberalización comercial y apertura irrestricta para los flujos de capital. La ley de entidades financieras de Martínez de Hoz marca el protagonismo otorgado a las finanzas y cambia la naturaleza del desarrollo nacional. Por primera vez en la historia, más que apoyar a distintos modelos de crecimiento productivo, como sucedió con la Argentina agraria desde 1880 y la Argentina industrial desde la transición de 1930-1945, el sector financiero pasó a constituirse en el “núcleo duro” de una manera de acumular, producir y distribuir. Gracias a factores internos, como la política macroeconómica del Proceso y a la desregulación financiera, y condiciones externas propicias, tales como la abundancia de petrodólares y las bajas tasas de interés internacionales, la matriz delictiva moderna diseñó una sociedad económica basada en la extracción y concentración de riqueza en manos de un grupo reducido de grandes empresas, bancos y transnacionales.

Los economistas del Proceso establecieron un anclaje cambiario para combatir la inflación. Las consecuencias fueron la sobrevaluación de la moneda nacional, la disminución y desprotección del mercado interno así como altas tasas de interés. La Argentina vio quebrarse su proceso industrializador. La desregulación, por su parte, condujo a un inmediato aumento de las tasas de interés a niveles incompatibles con la rentabilidad normal del sector productivo. Es la aparición de las mesas de dinero, de las “cuevas” donde aprendieron a ganar mucho sin arriesgar demasiado varias generaciones de especuladores. La matriz mafiosa local incorporaba nuevos y rentables modos de acción económica, en espera de convertirlos en estilos de hacer política.

En ese contexto propicio, aparecieron nuevos banqueros que tomaron el control de algunas entidades bancarias de segundo nivel. Captaron ahorro con la oferta de altas tasas de interés por los depósitos para prestarlo a empresas propias. Estos autopréstamos no se usaron para invertir, sino que - salvo contadas excepciones - su destino fue acaparar empresas ya existentes, fugar capitales o ambas cosas. El auge y la caída de estos banqueros advenedizos (intervenidos o liquidados en marzo y abril de 1980) trajeron grandes pérdidas para el fisco. A su vez, los grupos con mejores contactos externos y con vínculos más estrechos con las empresas transnacionales y los grandes grupos nacionales, protagonizaron bajo el amparo de la usurpación política el gigantesco vaciamiento del Estado Nacional, con la complicidad de la banca extranjera, la banca privada más tradicional y de sus grandes clientes.

La metodología empleada se basaba en las altas tasas de interés internas y en el compromiso de no devaluar más de lo que disponía una “tablita” preanunciada. Así resultaba conveniente para aquellos que tenían acceso al crédito internacional -grandes empresas y transnacionales- endeudarse en el exterior y colocar los fondos a interés dentro del país. También existieron situaciones de grandes grupos locales endeudados con el Estado... al que no le pagaban. El Banade, por ejemplo, canalizó crédito externo a largo plazo que obtenía para un reducido grupo de grandes empresas, muchas de las cuales luego incumplieron sus pagos, pese a estar al día con bancos privados. Por último, quienes se endeudaban a las altas tasas de interés en pesos eran las empresas privadas pequeñas y medianas, las empresas públicas -quienes además tenían tarifas bajas “para combatir la inflación “ - y el propio gobierno. Tal funcionamiento de la economía no era sustentable, y pronto entraría en crisis

Cuando en 1980 las quiebras bancarias y la creciente crisis económica hicieron prever el abandono del esquema cambiario, la matriz delictiva funcionó de manera transparente en defensa propia. Los especuladores cambiaron a dólares sus pesos, y constituyeron depósitos fuera del país; con la garantía de esos depósitos, los bancos extranjeros les daban nuevos créditos en dólares, que cambiaban por pesos y colocaban a tasas cada vez más altas. El negocio era incluso alentado por algunos bancos, como el Citibank, que ofrecía estas operaciones “back to back” a sus clientes²⁴. Crecía una deuda externa privada que tenía como contraparte altos montos equivalentes de depósitos en el exterior²⁵; en el proceso los especuladores ganaban la diferencia entre las tasas de interés externa e interna. Como las reservas disminuían, el gobierno obligó a las empresas públicas a contraer deuda externa, de modo que los especuladores privados pudieron completar la operatoria antes del cambio de gobierno de 1981, y decir “piedra

²⁴ Véase Eduardo Halliburton et alli, “Deuda externa privada, el destino de una investigación”, en Realidad Económica, Buenos Aires, n°87, segundo bimestre de 1989, pág. 72 a 113.

²⁵ Se estima en 89271 millones de dólares los haberes de residentes argentinos en el exterior en diciembre de 1999. Véase Ministerio de Economía, Estimaciones trimestrales del balance de pagos y de activos y pasivos externos, 1998-1999, Buenos Aires, 2000, pág. 26.

libre". El sector público incrementaba así su deuda externa para que disminuyera la deuda externa neta del sector privado, cuando no la precancelaba discretamente: fue la primera modalidad de nacionalización de la deuda privada, uno de las mejores maniobras de la matriz mafiosa.

El segundo mecanismo de nacionalización de la deuda vino con los seguros de cambio, que representaron transferir al Estado la carga de la deuda privada. Viola y Sigaut instituyeron los primeros seguros en junio de 1981; en julio de 1982, bajo la responsabilidad de Bignone, Dagnino Pastore y Cavallo, se dictaron nuevos seguros para préstamos vencidos o a vencer. No solamente estos "seguros de cambio" fueron ruinosos para el Estado debido a la desproporción entre las primas pagadas y las enormes devaluaciones, sino que en muchos casos se trató de un seguro sin causa, ya que el perjuicio alegado no era tal: con las devaluaciones, lo que un agente perdía por tener deudas en dólares lo ganaba por tener capitales en el exterior. En cuanto a las empresas públicas, se las excluyó de los seguros de cambio. Sería fácil después decir que eran ineficientes, para privatizarlas.

A partir de noviembre de 1982 culmina la nacionalización de la deuda. El Estado toma a su cargo, previo pago en pesos, algunas de las deudas con seguro de cambio. Se repite la operación el 9 de diciembre de 1983, un día antes de la asunción de Raúl Alfonsín, sin verificación de la legitimidad de la deuda. Y luego, en el marco de las renegociaciones de la deuda bancaria de diciembre de 1984 y de 1987, el Estado emite títulos de deuda externa para reemplazar deuda privada, que le es cancelada en pesos o australes.

Esta deuda externa, constituida para financiar la fuga de capitales y asumida por el gobierno, pesó de modo decisivo en la crisis de los años que siguieron. En lo político, significó una grave pérdida de independencia a manos de las condicionalidades impuestas para el acceso a refinanciamientos. En lo económico, implicó la transferencia al exterior, entre 1982 y 1988, 4,4% de su PIB -el doble de lo que tuvo que pagar Alemania como reparaciones de la primera guerra entre 1924 y 1932- y condujo a la transferencia lisa y llana de gran parte del patrimonio argentino. La matriz delictiva cuesta más que una guerra perdida.

Para realizar esta transferencia externa, debieron reducirse las importaciones, la inversión, el consumo privado y el gasto público, al tiempo que se aceleraba la devaluación de la moneda. Al mismo tiempo, se realizaba una "transferencia interna" ya que el Estado debía procurarse los recursos con los que comprar los dólares para enfrentar los pagos por deuda. En medio de la recesión, fue imposible evitar un abultado déficit fiscal, su financiamiento monetario y (habida cuenta de la devaluación acelerada), enormes presiones inflacionarias. Esta situación agravó la tendencia que empezó en 1976, por la cual la economía dejó de crear empleo en los sectores formales, mejor pagos y con tradición sindical, como la industria y el Estado. El sector público perdió mucho de su capacidad de acción tanto el gobierno como a través de sus empresas por el ahogo financiero. El "golpe de mercado" de 1989 significó que las condiciones sociales y la relación de fuerza permitían retomar las políticas iniciadas por Videla y Martínez de Hoz.

La nueva situación internacional a partir de 1991, tales como la reducción de tasas de interés y los nuevos flujos de capital hacia las economías "emergentes", permitió la vuelta al esquema del Proceso y sus principales ejecutores. Se repetía el esquema de 1976. El ancla cambiaria y el "círculo virtuoso" de freno a la inflación, habilitaron la remonetización de la economía, la recuperación de la actividad y la mejora de la recaudación pública entre 1991 y 1994. Sin embargo, el rígido esquema monetario y cambiario adoptado, útil para frenar la inflación, demostró ser incapaz de enmarcar un crecimiento sostenido, a menos de contar con un financiamiento externo cada vez mayor. Como no podía ser de otra forma, esto llevó a la actual crisis de sobreendeudamiento.

Este proceso redinamizó la matriz delictiva. Al agotarse los recursos provenientes de la Argentina industrial, ya exangüe, el sector público ofrecía excelentes oportunidades de negocio. Se trata de captar la renta nacional, a través de la transformación en rentas financieras de las empresas nacionales, de los servicios públicos y de las prestaciones sociales.

En cuanto a las empresas, vivimos hoy los desastres de Aerolíneas, y consideramos el vaciamiento de YPF. En efecto, Repsol/YPF extrae todo lo que puede, exporta mucho y explora muy poco. Vende el barril de petróleo en la Argentina a precio internacional, como si fuera importado; de este modo se queda con la renta petrolera, que consiste en la

diferencia entre el costo de producción (de 8 a 11 dólares el barril) y el precio internacional (entre 25 y 30 dólares el barril); con el agravante que aprovecha las exploraciones ya realizadas por la YPF estatal, lo cual disminuye el costo de producción. La desnacionalización efectuada combinó la apropiación de superganancias, la explotación poco sustentable y el desprecio por el interés nacional al agotar un recurso estratégico no renovable.

En lo que hace al servicio público, las condiciones de la privatización indujeron a que se asociase un operador con experiencia (forzosamente extranjero), un lobbista local y un gran empresario nativo. Los precios fueron muy baratos y gran parte se pagó con bonos de la deuda externa, que en ese momento se cotizaban a menos del 20% y se los computó a valor nominal: también ganaron los bancos y otros intermediarios y acreedores. En los contratos, además, se estableció que las tarifas se dolarizan y varían en función de la inflación de Estados Unidos, con lo que quedan al abrigo de toda devaluación y pueden aumentar precios de manera periódica. Existen además reclamos por incumplimiento de las inversiones a las que se comprometieron las empresas. Al mismo tiempo, falta estructurar la mayor parte de los entes reguladores estatales. Como consecuencia, las ganancias fueron –y son- extraordinarias.

Pero en pocos acontecimientos resulta tan elocuente la naturaleza rentística-financiera de la matriz delictiva como en el negocio de las AFJP. Gracias a la privatización –aún parcial- del sistema de jubilaciones, captan el 11% de los salarios, se quedan con la comisión (el 30% de los aportes) y administran la mayor caja del país. Pero no termina allí: mientras ellas absorben las contribuciones, a las jubilaciones las sigue pagando el gobierno; esta sangría de 4.500 millones de dólares anuales -junto con los intereses de la deuda- es responsable del déficit fiscal. El colmo es que las AFJP prestan estos fondos, que por su naturaleza son públicos, al mismo Estado a altas tasas de interés.

En síntesis, la falta de relación del sector financiero con el sector productivo de la economía real, y la maximización de ganancias financieras parecen ser los dos pilares del comportamiento delictivo en esta última etapa. Ambas características sobresalen en la acción del sector financiero. En primer lugar, realiza las operaciones bancarias normales, por las que cobra precios abusivos; en un contexto de estabilidad monetaria, los intereses activos y spreads son altísimos. Además, lucra con las conversiones de la deuda, desde la capitalización de la deuda y el plan Brady hasta el megacanje. La escuela de las “cuevas” rindió buenos resultados: allí aprendieron lo que saben los pensadores, decisores y ejecutantes en la actualidad.

Los resultados están a la vista: creciente desigualdad en la distribución del ingreso y del patrimonio, niveles de desempleo y subempleo que no tienen precedente histórico, deterioro de la educación, la salud y de las jubilaciones. También está a la vista la incapacidad de generar crecimiento en el marco del actual modelo, ni siquiera un crecimiento injusto y desequilibrado, y nos ha sumido en una nueva crisis de la deuda, en un nuevo ajuste cuya regresividad es tan brutal como transparente.

13.5 Conclusión

La matriz mafiosa que recorre la historia argentina precede la existencia misma de la República. La intermediación y el contrabando existían en tiempos de la Colonia. El aprovechamiento delictivo de contratos, concesiones y compras del Estado tiene larga data, así como los manejos políticos en busca de rentas y de beneficios. Pero siempre existió, al lado de esa matriz, contra su naturaleza delictiva, una corriente de pensamiento y de acción que abreva en otras fuentes. La realidad era muchas veces injusta, pero la explotación de personas y recursos era culposa hasta para sus ejecutantes. Así tuvimos momentos de grandeza, cuando vastos sectores nacionales asumieron con inteligencia y compromiso, también con coherencia, las necesidades y los derechos populares. La matriz mafiosa quedaba relegada. Sólo resurgía al amparo del fraude y del golpe, con la represión como política social, con la corrupción como acción política, con la traición hacia el interés nacional como horizonte. En notable sincronía, contrabandistas, latifundistas, contratistas y banqueros comparten el mismo desprecio hacia los criollos, los inmigrantes, los obreros y los desocupados; utilizan la idea de Patria en provecho propio: fraude “patriótico”, ajuste “patriótico”, bono “patriótico”. Su mentalidad es la misma, y bajo la tenue capa de democratismo formal afloran, como en un estudio geológico, las capas más añejas y más permanentes de la mentalidad tradicional, adecuada a la moda del día.

La diferencia substancial es que la matriz mafiosa actual pretende tener razón: las “cuevas” financieras de donde salió esta clase dirigente se parece en eso —sólo en eso— a la Caverna de Platón: sólo cuentan las sombras que ven danzar en el fondo de la gruta, como los vaivenes financieros, y los confunden con la realidad. Así han desviado para uso propio la herencia de la Argentina agrícola y los recursos de la Argentina industrial. Agotados éstos, convirtieron al Estado en fuente de renta. Ahora van por los derechos sociales que quedan, para que la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la defensa de los argentinos se conviertan en negocios.

Acaso esta situación tenga el mérito de clarificar las intenciones de cada actor de modo transparente. Aún formales, las instituciones que quedan son un obstáculo para culminar la acumulación de la matriz mafiosa. La gravedad de la crisis económica puede representar la oportunidad de cambiar de modelo económico y establecer una República digna de los argentinos, de sus necesidades actuales y de su historia pasada. Pero requiere actos. El primero de ellos es echar luz sobre los manejos más delictivos de la matriz mafiosa, porque los imperios caen cuando no son capaces de respetar las reglas que ellos mismos han establecido.

Epílogo

El informe que antecede suministra datos clave para entender lo sucedido en la Argentina en el último cuarto de siglo. Durante ese periodo el ingreso per cápita se redujo un 8 por ciento. Esa caída estadística no se repartió en forma homogénea. La pobreza extrema y la riqueza extrema pasaron a coexistir en un espacio que al promediar el siglo pasado estuvo entre las sociedades más igualitarias del mundo.

Al mismo tiempo fugaron del país 140 mil millones de dólares. Tantos como los del endeudamiento público, cuyos intereses se han invocado como motivo para la mutación de jubilaciones y salarios en una mera conjetura.

Es cierto que la matriz del Estado mafioso que se instaló a partir de la década de 1970 tiene largas raíces. Las investigaciones de Mitre ya señalaban al contrabando como elemento constitutivo de la sociabilidad rioplatense ante la prohibición de uso del puerto de Buenos Aires.

Tampoco es nueva la violencia que lo sustenta. Con la conquista del desierto y la entrega a 1.843 personas de 41 millones de hectáreas arrebatadas a los indios se consolidaron grupos de poder decisivos y nuevas formas de inserción en el mercado mundial.

La tierra quedó fuera del alcance de nuestros abuelos inmigrantes atraídos por el programa de Sarmiento y Alberdi. No hubo colonización agrícola de pequeñas propiedades que producen para el mercado interno como en Estados Unidos sino gran latifundio de exportación que nos ató al mercado británico. Y desde el empréstito Baring, de 1824, la deuda externa fue el gran mecanismo reciclador de las relaciones de poder. Porque unos gozan del crédito y otros lo pagan.

Con el yrigoyenismo en 1916 y el peronismo en 1945 irrumpieron los sectores sociales subalternos cuyas necesidades habían sido ignoradas. Ambos gobiernos fueron interrumpidos por el Partido Militar. La espada cortaba el nudo de la irrepresentatividad que el bloque dominante no sabía desatar, pero era inepta para volver a unir las partes segmentadas en un todo cohesionado.

Luego del golpe de 1955 dos coaliciones sociales y políticas opuestas pugnaron por imponer sus intereses contradictorios. Cada gobierno electo por el voto popular mejoró la distribución del ingreso a favor de los trabajadores, con cada golpe militar su participación retrocedió. Esta regla de oro dejó de regir luego de la sangrienta dictadura militar de 1976 a 1983.

Los extremos de barbarie desplegados desarticulaban al partido militar y desembocaron después de la guerra de las Malvinas en una acelerada reinstitucionalización. Antes de ella, el Estado se hizo cargo de la deuda privada, que transfirió al conjunto de la sociedad.

También puso en marcha los programas de capitalización de deuda para inversiones productivas, que terminarían por convertirse en instrumentos de descapitalización y arrasamiento de la producción y fuente de negocios a expensas del patrimonio común de

los argentinos. Contra lo que había ocurrido siempre antes, la participación de los trabajadores en el ingreso no hizo otra cosa que caer bajo las tres presidencias constitucionales que sucedieron al último dictador. También se consolidaron otros rasgos impuestos bajo el terrorismo de Estado.

La producción para el consumo interno fue desplazada como motor de la economía por la valorización financiera del capital, la toma de ganancias y su remisión al exterior. En esta nueva lógica que persiste hasta hoy el salario deja de ser un componente de la demanda y sólo es visto como un costo a reducir. Dos décadas así han disgregado la Nación, pero también el mercado.

La patria financiera es una descripción eficaz pero imprecisa, ya que todas las fracciones del bloque dominante participan de ese funcionamiento perverso de la economía que consiste en colocar a interés fuera del país los beneficios obtenidos adentro en lugar de aplicarlos a la producción, cuyo financiamiento queda librado al subsidio estatal. Esa clase prebendaria y predatoria se acostumbra a vivir al margen de la ley, a seguir cualquier atajo que le permitiera realizar ganancias exorbitantes. Sólo reinvertió en el país la mínima porción destinada a solventar sus consumos suntuarios. En ese proceso se corrompió y corrompió a los funcionarios públicos que desde el aparato estatal garantizaron las medidas de política económica que permitieron esta succión continua de recursos.

Además de los chupaderos en los que fueron atormentados y asesinados los detenidos-desaparecidos, funcionaron en aquellos años feroces las cuevas en las que se realizaban los arbitrajes, que dieron origen a entidades financieras que llegarían a ser notorias después de la dictadura.

La caída de los grandes relatos de la historia dejó lugar a la pequeña picaresca de la corrupción. Esa fue la moneda en que la dirigencia política de los grandes partidos que alguna vez protagonizaron revoluciones cotizó el abandono de sus banderas históricas. Sólo las hacen flamear de tanto en tanto en algún discurso, sobre todo cuando procuran encubrir alguna decisión en contrario. Junto con esa inversión de alianzas, adquirieron los hábitos de sus nuevos asociados.

Este proceso se desarrolló a lo largo de más de 25 años pero su ritmo se aceleró en la última década. Ante la bancarrota del Estado de Bienestar para Pocos los organismos financieros internacionales postularon cruzar los regímenes de capitalización de deuda con el desguace de las empresas estatales. En ningún país del mundo el proceso de enajenación de activos públicos fue tan rápido, drástico y sospechado como en la Argentina, que se arrojó desnuda al huracán de la globalización

En los mismos años se detectaron las primeras incursiones en el país de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Las viejas cuevas financieras y su pericia en un vasto repertorio de compañías offshore, sellos de goma, espejos virtuales y cáscaras vacías brindaron la ingeniería para el reciclaje de los fondos generados de ese modo y su inversión posterior en emprendimientos legítimos al cabo de enmarañados recorridos por paraísos fiscales y cuentas cifradas.

Colocaron sus hombres en el corazón de la autoridad monetaria y desarticulaban los mecanismos de control. Robustas instituciones financieras internacionales los cubrieron con su paraguas protector. Oscuros personajes se encumbraron con una velocidad de vértigo, alternando con las cúpulas empresariales y políticas que se sirvieron de ellos. Con cuantiosas inversiones en medios de comunicación creyeron posible anestesiarse a la opinión pública, de modo que el pillaje no fuera puesto en tela de juicio.

Cuando ya no quedaron más activos físicos por liquidar traficaron con las contrataciones del Estado, con la impedimenta de las Fuerzas Armadas, con títulos de los estados provinciales, con drogas de consumo ilegal. Pusieron precio a las decisiones de los tres poderes del Estado, cuyos roles usurparon. Despreciaron la ley y la vida y se guiaron por códigos que no son los de la Constitución y las leyes. Esa es la Argentina decadente cuyo juicio de residencia está contenido en las páginas de este informe y en su documentación respaldatoria.

Hay otra Argentina que impugnó y resistió. Parte de las informaciones elaboradas por esta comisión proviene de ese segmento mayoritario de nuestra sociedad que no se resignó. No estamos ante una catástrofe natural inevitable. Por devastadores que hayan sido sus efectos, sólo obedecen a decisiones humanas que, como tales, son revocables. Este

informe es una respuesta desde la política y desde las instituciones, que no se resignan a ser rehenes de una matriz de Estado destructiva, depredadora del propio cuerpo social que la cobija. Que aspiran a establecer una nueva matriz, en la que no sólo la economía, sino también la política, la cultura y la ética sostengan un proyecto que sea al mismo tiempo colectivo, productivo y competitivo.